



proyecto Castor.

«Una vez se pararon los trabajos de inyección del gas en la plataforma Castor acabaron también los movimientos sísmicos, por lo tanto, era una clara evidencia, con todo, estamos satisfechos que lo hayan corroborado estudios a pesar de haberlo hecho con tres años de atraso», afirma el delegado, quién también se suma a las peticio-

nes de desmantelamiento definitivo del almacén de gas.

«La mala gestión del Estado la hemos tenido que pagar la ciudadanía: primero sufrimos los terremotos, después asumimos la indemnización a Escal UGS y ahora tendremos que asumir los costes del desmantelamiento, es muy preocupante», afirma Pallarès.

La Generalitat seguirá la pelea por la vía judicial

‘El mal ya está hecho. Lo que queremos es que el coste no lo tengamos que pagar todos los ciudadanos en el recibo del gas’, afirmó el conseller de Empresa, Jordi Baiget

EUROPA PRESS

El conseller de Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, pidió ayer que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget consideró que, tras conocerse este miércoles el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia».

Consideró que «había cosas que era muy atrevido tirarlas adelante sin tener los informes suficientes», y que si se hubie-

se hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral. «Bienvenido sea –el informe del MIT– si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», aseveró.

«Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha

El Govern ha llevado el litigio a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional

hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», y agregó que la Generalitat continuará luchando para evitarlo por la vía judicial –tiene causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional– porque lo ve injusto.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén de gas Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura. Además, el Govern ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante los cánones sobre el gas para que los usuarios paguen el Castor.

Greenpeace pide protocolos para evitar ‘despropósitos’ como el Castor

■ La ONG Greenpeace ha denunciado el «alto coste» del «fallido» proyecto de almacén de gas Castor y ha pedido que se establezcan protocolos para evitar «despropósitos» como este, con un «alto riesgo medioambiental y económico».

Según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén submarino de gas, situado frente a las costas de Vinaròs, al nor-

te de Castellón, es uno de los ejemplos más claros de «despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias».

La ONG recuerda que ña constructora ACS recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar los terremotos.

Para Greenpeace es necesario dismantelar las instalaciones del almacén de gas submarino tan pronto como las condiciones lo permitan, y «evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este, que acarreen riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas».

Los partidos de izquierda exigen el desmontaje de la plataforma gasista

■ El senador de Esquerra Republicana Miquel Aubá pidió ayer la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique los planes del Gobierno sobre el almacén subterráneo de gas Castor y reclamo su inmediato desmantelamiento. Aubá pidió que se «deje de marear la perdiz» y que los costes de acabar con este depósito «no recaigan en los consumidores».

En sentido similar se manifestó el diputado de En Comú

Podem Josep Vendrell, que pidió la comparecencia del ministro Nadal en el Congreso para que explique las actuaciones que va a realizar el Gobierno con el Castor. Según En Comú Podem, el depósito de gas fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», consecuencia de un modelo energético basado en los combustibles fósiles.

Por su parte, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) pidió al Banco Europeo de Inversiones

colaborar en el desmantelamiento del almacén de gas Castor, ya que esa institución comunitaria participó en la financiación del proyecto.

«Exigimos al Banco Europeo de Inversiones que se preste a colaborar en el desmantelamiento de la infraestructura, garantizando así su cierre definitivo, que es lo que exigen los vecinos», aseguró en un comunicado el eurodiputado de ICV, Ernest Urtsaus.